
UNA CAMPAÑA DE ESPALDAS A LA CRISIS

Andrés Dávila L.*

LAS PREGUNTAS CENTRALES

En medio de la situación que atraviesa Colombia, el desarrollo de la campaña presidencial y la realización de las elecciones plantean interrogantes de importancia. Cada cuatro años, la competencia por la Presidencia de la República, acompañada siempre de la elección de los miembros de los cuerpos colegiados, ha jugado un papel significativo. Independientemente de las circunstancias particulares de aquellos procesos, la elección de quienes han gobernado al país ha sintetizado los factores fundamentales que caracterizan la lucha política dentro del ordenamiento institucional existente. Han sido procesos que, como muchos de sus defensores lo recalcan y muchos de sus detractores lo reconocen, han probado la existencia de un orden democrático (estrecho, formal, no importa su definición exacta) que impone sus reglas de funcionamiento. Así sucedió en 1986, a pesar de lo reciente que había sido la toma del Palacio de Justicia y del evidente deterioro del orden público.

Hoy día, ante la aparición de la campaña en el panorama político inmediato, se presentan tres inquietudes básicas. La primera es sobre el papel que juega la pugna por escoger al suce-

sor de Virgilio Barco en las actuales circunstancias de confrontación y desorden público. Cabe preguntarse, entonces, si la realización de las elecciones demuestra que todavía es posible el desarrollo del proceso electoral dentro de las condiciones impuestas por un régimen político que conserva la capacidad de mantener sus normas de funcionamiento.

Una segunda inquietud, derivada de la anterior, apunta a precisar las implicaciones del papel que todavía parece jugar la campaña presidencial. Es decir, ¿cuáles son los costos y beneficios resultantes de la fortaleza del régimen para sostener la formalidad democrática e imponer nuevamente sus determinaciones?

Una tercera inquietud se interesa por identificar las condiciones concretas que van a delimitar el desarrollo de la contienda electoral. ¿Cuáles son las características que definen la actual campaña y en qué perspectiva parecen moverse?

FORTALEZA Y CRISIS DEL REGIMEN POLITICO

Desde los inicios de la campaña, meses antes del asesinato de Galán, ésta definió su perfil. No importó el creciente desbordamiento de las violencias (en especial la de los paramilitares y

* Politólogo. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

la del narcotráfico), ni tampoco la magnitud y la definición de la crisis. Los sectores involucrados en la contienda, con sus múltiples aspirantes, se aferraron a la capacidad del establecimiento para mantenerse incólume y en funcionamiento, a pesar de los desafíos existentes. Hubo, implícitamente, plena confianza en que, a medida que el proceso avanzara, se volvería a copar la atención del país y se aliviaría, al menos por un período, la espiral de la violencia.

Por ello, al igual que en años anteriores, los parámetros de desarrollo del debate se enmarcaron dentro de la mecánica electoral tradicional. A los interesados les preocupó exclusivamente lo referente a las maquinaciones burocráticas, clientelistas y del "marketing" político. La crisis, las violencias, los desafíos al Estado y a las clases dominantes fueron apenas un motivo para la retórica de los aspirantes. Sólo que estos procesos, a pesar de ser tangenciales respecto de la campaña, se acercaron cada vez más para poner en peligro su desarrollo.

Muestra de ello fueron el asesinato de Galán y la posterior dinámica del conflicto, los cuales obligaron a un receso en la campaña. También, con la ocurrencia de esos hechos, se plantearon interrogantes acerca del proceso electoral y sus condiciones de desarrollo. Se abrió, entonces, un compás de espera.

El lento retorno de los precandidatos a las plazas y a los distintos auditorios ha reconfirmado esa paradójica capacidad del régimen para mantenerse y convivir con el desorden. La campaña se ha puesto en marcha, sus características concretas se han modificado parcialmente y algunas variables, referidas principalmente a la seguridad de los precandidatos, han ganado en importancia. Pero los factores esenciales han permanecido. En definitiva, a pesar del agravamiento de la situación de orden público y de las inestables condiciones en que se ha desarrollado el proceso político, ni el eje central que sostiene el funcionamiento del régimen (esa combinación de clientelismo y formalismo jurídico, en manos de unas élites bipartidistas conservadoras y defensoras de sus privilegios), ni el nexo que permite la existencia paralela del desorden violento y la normali-

dad democrática, han sido afectados de manera que realmente amenace su continuidad.

Por ello, la campaña se ha reiniciado sin haber cambiado su perspectiva. Se ha desarrollado dentro de los marcos institucionales y legales definidos por el régimen y lo ha hecho con sujeción a los parámetros considerados normales en la reproducción del poder político en Colombia. Obviamente, en ella están ausentes las alternativas de solución a la crisis, los proyectos políticos que asuman las transformaciones que con tanta evidencia se hacen necesarias, y los líderes o sectores con la voluntad política para asumir un reto de esta magnitud. Pero el país ya está acostumbrado a esa ausencia de opciones y a tener que escoger entre un limitado espectro de alternativas.

El papel básico de la campaña ha sido, por tanto, poner de manifiesto que todavía hay un ordenamiento institucional vigente y en funcionamiento. Y ese orden define las reglas de juego, a pesar de las amenazas y pese a que algunos de los pilares que hasta hoy lo han sostenido hayan sido socavados.

LAS IMPLICACIONES

La campaña ha proseguido y todo indica que las elecciones se llevarán a cabo en las fechas previstas. Este desenlace de los acontecimientos ha cumplido, simultáneamente, dos funciones. En primer lugar, ha servido para mitigar la incertidumbre generada por el desbordamiento del conflicto. La confrontación entre el gobierno y el narcotráfico conllevó una destabilización en todos los órdenes. Aunque el alcance de tales hechos no es claro todavía, las querellas entre los dos partidos y la dinámica proselitista, cada vez más acentuada por parte de los distintos aspirantes, han servido para corroborar un retorno a la normalidad previa al asesinato de Galán. El proceso electoral ha jugado, en consecuencia, el papel de amortiguador de la crisis, cuestión nada despreciable en las actuales circunstancias.

Pero, en segundo lugar, tal función no ha permitido que se preste la atención requerida a los desafíos presentes. Estos han quedado para reseñas poco comprometidas de parte de los

precandidatos. La discusión y construcción de soluciones a la crisis han pasado a un segundo o tercer plano, porque el acrecentamiento de la violencia narcoterrorista y la respuesta represiva del Estado han incrementado la confusión y han mostrado la casi absoluta desorganización de la sociedad civil, bien sea a nivel político, gremial o de movimientos sociales. No existe, en la sociedad civil, quién pueda asumir y canalizar los fenómenos presentes en aras de clarificar el panorama de modo que se logre articular algún tipo de respuesta. La definición de alternativas (democráticas o no) se ha visto relegada por un proceso político en el cual todavía priman las negociaciones políticas usuales, con su inmediatismo y pragmatismo, cuyo fin único está en incrementar un capital electoral. En este tipo de proceso se han mantenido los sectores más representativos de la clase política. Esta ha sido la respuesta en medio de la confusión y el temor reinantes.

El régimen bipartidista, sin embargo, continúa urgido de reformas para reconstituir sus espacios de dominación. Quienes lo dirigen se han aferrado a las discusiones de los procedimientos, se han engolosinado con esa apariencia de inagotable estabilidad y han detenido cualquier intento que pueda culminar en un proceso de transformación significativa, cualesquiera sean sus características. Se confía, todavía, en una fortaleza institucional que hasta ahora ha sido muy eficaz.

La convivencia de estos dos factores: fortaleza sin reformas y crisis sin reformas, no sólo ha sido posible sino que ha delineado el tipo de propuestas y comportamientos que se pueden desarrollar. Únicamente han tenido cabida aquellas propuestas que han invocado una restauración y fortalecimiento del orden existente, de modo que los desafíos de la violencia no afecten la estabilidad. Pero incluso estas propuestas se han quedado en la mera formulación sin que hayan tomado un cariz de realidad en lo inmediato. Los comportamientos, por su parte, han reflejado un esfuerzo por no dejar que se altere la normalidad y por evitar que, al involucrarse al debate un tema tan complicado como el del narcotráfico, se llegue a un punto en el cual sea necesario airear un enredado escenario de vinculaciones.

En consecuencia, las implicaciones de lo sucedido más que respuestas abren un interrogante. Ciertamente, no se sabe hasta dónde será posible prolongar la tensión existente entre estabilidad y crisis violenta, y cuánto más aguantará el régimen político sin verse abocado a un cambio de rumbo, de seguir sometido a la dispersión de los factores de poder y a la confusión y equivocidad creciente en las acciones emprendidas por los distintos actores implicados. No obstante, lo que inquieta en el corto plazo es saber qué efectos puede producir en la compleja situación actual el éxito de las respuestas inmediatas, apoyadas en las tradicionales palancas de poder, de las cuales la campaña presidencial ha sido hasta ahora un claro ejemplo.

En el devenir del proceso político posterior al asesinato de Galán, que ha sido simultáneo al enfrentamiento con el narcotráfico, el régimen se ha mantenido con un monopolio bipartidista de hecho y continúa procesando a medias los distintos componentes de la crisis. Y en todo su centro vital, la campaña ha seguido con unas características particulares de desarrollo que es necesario señalar.

LAS CONDICIONES CONCRETAS DE LA CAMPAÑA

La letra menuda de la competencia en pos de la Presidencia ofrece una saturación de hechos. No obstante, ellos repiten situaciones ya experimentadas, negociaciones, conflictos y procesos que en pocas ocasiones ofrecen desenlaces inesperados que afecten la normalidad del proceso. La mayor parte de las veces, los mismos actores, los mismos sectores y similares comportamientos reproducen una especie de comedia circular de las equivocaciones y los engaños. Por ello, los aspectos significativos y que merezcan la atención pueden reducirse a unos pocos.

En la campaña presidencial de 1990 un primer elemento que la caracteriza es la proliferación de candidatos. Tal situación evidencia las dificultades de unas élites políticas tradicionalmente cerradas, que han tenido poca movilidad y cambio en sus miembros. Los líderes de las dos colectividades no han tenido el suficiente

control para designar un candidato único, a causa de esas dificultades y de la inexistencia de aspirantes con la suficiente categoría. Los mecanismos utilizados hasta las anteriores elecciones mostraron su agotamiento, previsible desde entonces. La fortaleza de las estructuras de liderazgo a nivel nacional, informales, atrasadas, autoritarias y estrechas no pudieron adecuarse a las nuevas circunstancias y parecen haber claudicado ante los obstáculos. Pero, además, en el escenario preelectoral aparecen con mayor fuerza líderes y facciones de dimensión regional que, si bien no dan la talla para ser ungidos como candidatos únicos, han labrado el poder electoral y político suficiente para exigir un nuevo tratamiento.

En vista de la situación, el Partido Liberal optó por la Consulta Popular como mecanismo destinado a superar las dificultades. Paradójicamente, Galán, el único precandidato que podía tener dimensión nacional y talla para imponerse sobre los demás, tuvo que promover este mecanismo y someterse a sus exigencias y resultados. Además de que su figura y carisma no le alcanzaron para hacer valer su turno a la Presidencia, su reciente ingreso al oficialismo liberal y los enemigos declarados que tenía dentro de éste lo obligaron a asumir tal posición.

El mecanismo como tal ofrecía perspectivas positivas en aras de una alternativa de solución a la crisis y al errático funcionamiento del partido, cada vez más atravesado por los intereses particulares de sus múltiples facciones regionales. Tenía, también, un potencial democratizador y de obligar a una modernización organizativa de esta colectividad. Sin embargo, junto con los cuestionamientos y críticas que no han desaparecido, todo ha apuntado a mostrar que el peso de los caciques clientelistas en la selección del candidato será definitivo.

El socialconservatismo, por su parte, ha afrontado el dilema bajo dos condiciones: es el partido minoritario y ninguno de sus precandidatos presenta posibilidades reales de superar a sus opositores liberales. Ha asumido una actitud de espera y de cercana observación del proceso electoral en el liberalismo, mientras incrementa la "oposición reflexiva" y trata de mitigar y solucionar la división del alvarismo y el pastra-

nismo. Por ello, no ha precisado cuál será su fórmula para escoger el candidato, mientras espera la realización de la convención en noviembre.

No obstante, cada vez parece más seguro que los candidatos definitivos apenas se conocerán a principios del año entrante, con muy pocos meses para adelantar su campaña. Esta situación contrasta con la aparente urgencia de contar con un candidato y un programa que ofrezcan alguna respuesta, alguna certidumbre a una opinión pública ansiosa. Pero, igualmente, esta situación refleja la paradójica coexistencia de la crisis de los partidos y las élites, y una normalidad de la que no se duda, pues se cree que será capaz de sacar adelante el proceso.

El asesinato de Galán y la violencia que le siguió trastocaron, como es apenas obvio, las condiciones de desarrollo del proceso. A pesar del mencionado retorno de las actividades proselitistas y del ambiente de campaña presidencial, fueron varios los efectos. La desaparición del líder que representaba el centro político, característico en el comportamiento de los distintos gobiernos, ha acentuado la polarización del escenario electoral presidencial hacia la derecha. Tal cuestión ha modificado el panorama de las coaliciones, adhesiones y negociaciones, entre las múltiples facciones de los dos partidos. Al respecto, se han abierto más interrogantes, en la medida en que César Gaviria, sucesor de Galán y protegido del gobierno, se ha mostrado poco dúctil en el manejo de ese centrismo a ultranza. Por esta vía, también, tienden a fortalecerse las opciones autoritarias y regresivas.

La pérdida del único candidato que contaba con arraigo en la etérea y ambigua opinión pública, que sintetizaba muchos de los anhelos de numerosos e influyentes sectores de la clase media, y que tenía lo más cercano a un proyecto político (aunque éste se debatiera entre la modernización institucional, un moralismo retardatario y propuestas potencialmente democráticas) confirmó la orfandad de los electores colombianos frente a opciones más elaboradas y con algún tipo de respuestas a la crisis. Pero esta situación no es nueva. No hay que olvidar lo que se dijo de Turbay, lo que sorprendió Betancur y la resignación ante Barco.

La reacción de los demás aspirantes presenta algunos aspectos a tener en cuenta. No existe una clara posición de compromiso o rechazo a la guerra declarada por el gobierno. No se toman determinaciones respecto de las consecuencias de una campaña en medio del terror sentido inicialmente, que se llegó a pensar obligaría a evitar la plaza pública y hacer uso exclusivo de la televisión y los recintos cerrados. Según se había hecho desde un principio, los candidatos han optado por hacer a un lado los temas espinosos y confiar en la fortaleza institucional y en las promesas de garantías dadas reiteradamente por el gobierno. La actitud ha sido dejar pasar lo peor y esperar que de las sombras la campaña pueda volver a la luz pública. Mientras tanto, a los problemas del país se les ha dado un trato apenas marginal y se les ha reducido a simples "slogans".

Estas reacciones han reflejado a cabalidad la naturaleza de la clase política en conjunto. No es del caso entrar a esclarecer las supuestas vinculaciones de muchos de los líderes políticos con el narcotráfico, pero sí hay que resaltar la cada vez más explícita aceptación de las negociaciones con los carteles, posición que ha sido incluso justificada por los respectivos presidentes de las dos Cámaras en el Congreso. Esto al tiempo que se enrarece la discusión sobre la guerra a la mafia y asoman posiciones de otros sectores que cuestionan las acciones del gobierno.

Los escenarios posibles pueden ser muchos, pero es difícil que suceda algo por fuera de los parámetros globales señalados repetidamente hasta aquí. El próximo presidente, al igual que varios de sus antecesores, se posesionará sin ofrecer esperanzas ciertas a sus electores y a la sociedad colombiana, y con serios desafíos para enfrentar inmediatamente. Al fin y al cabo será más el producto de la votación en contra de alguien, que de la votación y el apoyo a su figura y su programa.